Globethics Repository



Uruguay: la gota que puede colmar el vaso [Uruguay: the straw that can fill the glass]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Trobo, Claudio
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-14 06:04:49
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221738

Nueva Sociedad Nro. 67 Julio-Agosto 1983, pp. 12-15

Uruguay: la gota que puede colmar el vaso

Claudio Trobo Escritor y periodista uruguayo

El diálogo entre los militares en el poder y los representantes de los partidos políticos autorizados en Uruguay ha estado signado desde su origen por dificultades cuya solución ha parecido siempre hipotética. La propia distancia entre las posiciones de ambas partes y la ya peculiar característica de un gobierno que tiene todos los frentes abiertos y que ha sufrido derrotas aplastantes, sin por eso querer abandonar posiciones, ha constituido un obstáculo permanente.

La oposición ha ido ganando paulatino terreno en medio de una crisis económica generalizada y de una represión oficial que ha intentado acallar las múltiples voces de protesta que se han ido levantando. En diez años de gobierno militar, la deuda externa se multiplicó por siete pasando de 771 millones de dólares a la cifra de 5.205 millones; el salario real cayó a la mitad, la desocupación supera el 15 por ciento y el aumento del costo de la vida llegó a más de un veinte por ciento en un solo mes.

Bajo el signo de la derrota

Al igual que Argentina y Chile, Uruguay ha visto como sus estructuras económicas han sido abatidas por una política que solamente ha beneficiado al capital financiero y ha destruido industrias, comercio y la actividad agropecuaria, principal fuente de recursos del país. Esa política fue impuesta a partir de 1973, con el control directo de todos los resortes oficiales por parte de las fuerzas armadas, lo que llevó a Uruguay a detentar los tristes privilegios de ser la nación de América Latina con un mayor porcentaje de presos políticos y exiliados, a la par que exhibía la más grande deuda per cápita del continente.

El aparente silencio de un pueblo que no podía expresarse públicamente para la defensa de sus derechos hizo confundir al gobierno. Es así que en noviembre de 1980 la dictadura, creyéndose fuerte, pretendió legitimarse en un plebiscito organizado sin libertad y sin garantías. Pero el pueblo mayoritariamente rechazó el cronograma propuesto por las fuerzas armadas.

Obligado por esa derrota, el régimen recurrió a vías más complejas para el logro de sus propósitos, procurando encauzar a la oposición y dirigirla, e intentando "reorganizar" a los partidos políticos tradicionales con elecciones internas someti-

das a estatutos estrechos. Esa consulta dejaba afuera a importantes sectores de opinión - como la Democracia Cristiana y los Partidos Socialista y Comunista - que seguían en la ilegalidad, y mantenía proscritos a más de once mil ciudadanos. Pero, pese a la forma en que se desarrolló el proceso, más del 80 por ciento de la opinión expresada en esas elecciones internas fue adversa al gobierno.

Es así que se constituyen las convenciones de los dos partidos tradicionales - Nacional y Colorado - y de la Unión Cívica, pequeña agrupación conservadora también autorizada, y dichas reuniones políticas permiten pronunciamientos que por nueve años estaban prohibidos en el país. Las declaraciones de los partidos tradicionales llaman "al pleno goce de las libertades políticas, sindicales y culturales y a la amnistía de los acusados por delitos de motivación ideológica, para construir un nuevo tiempo en la República, sin proscripciones de hombres, partidos o corrientes de pensamiento, que actúen de acuerdo a la ley surgida de la soberanía popular y en la cual el respeto a la Constitución sea la garantía del reencuentro nacional". Estas formulaciones estuvieron acompañadas de un cuerpo de objeciones de fondo hechas al desempeño militar en la conducción del país, no sólo desde el punto de vista del abatimiento de las libertades sino por la aplicación de una política económica "que ha provocado una crisis sin parangón en nuestra historia".

Un diálogo muy particular

El resultado de la consulta y los pronunciamientos de las nuevas autoridades partidarias autorizadas inquieta a los altos mandos. Es así que el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, Gral. Rapela, sale al camino y dice que le preocupan dichas declaraciones. Y mientras los representantes de los partidos reclamaban un anticipo de las elecciones, previstas para noviembre de 1984, el mismo Rapela dijo que dicha fecha peligraba si no se cumplía con los requisitos exigidos por las fuerzas armadas.

En este clima se iniciaron las conversaciones a mediados de mayo, y las desinteligencias fueron paulatinamente agravándose. La prioridad fundamental para las fuerzas armadas ha sido desde el inicio de las conversaciones obtener como condición previa a todo otro tipo de acuerdo, el aval político para aprobar una nueva Constitución, en la que se reservan para sí la tutela de todos los resortes fundamentales en los nuevos gobiernos, apelando para ello al rótulo de "seguridad nacional". Pero los políticos, desde el inicio de las conversaciones, sostuvieron que ningún gobierno elegido por el pueblo puede transar en su legitimidad y aceptar compartir ese poder o subordinarlo a la decisión de los militares; y por tanto, las dificultades se plantearon desde el inicio, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto elaborado por los militares era la base de la propuesta ya derrotada en el plebiscito del año 80.

La propia característica de los hechos, al hablarse de materia política después de casi una década, produjo situaciones incontroladas por parte del gobierno que pretendió luego solventar mediante la aplicación de medidas punitivas. Es así que en medio de las conversaciones clausuró por seis meses "Democracia", vocero del mayoritario Partido Nacional, y luego encarceló al dirigente nacionalista Carminillo Mederos por "vilipendio a la fuerza moral de las fuerzas armadas". La cúpula militar hizo múltiples pronunciamientos en el sentido de que no estaba en entredicho su acción, y el general Rapela fue más terminante: "No estamos transitando un camino de apertura, sino estableciendo las condiciones de cómo va a ser esa apertura..."

A esta altura, el zarandeado diálogo entró en una instancia crítica y el dirigente del Partido Colorado, Enrique Tarigo, sostuvo que "esta es la gota que puede colmar el vaso. El problema se nos plantea a todos porque todos estamos en el mismo barco. La actitud de las fuerzas armadas puede hacer fracasar todo diálogo posible".

Una creciente presión

Mientras las conversaciones se desarrollaban tan dificultosamente, otros hechos componían la marcha del proceso. El Primero de Mayo fue celebrado, tras diez años de prohibiciones, con una gigantesca manifestación convocada por todos los partidos políticos - permitidos y proscritos - y 47 organizaciones sindicales. En la tribuna se hicieron presentes representantes de las diferentes corrientes políticas y de la Convención Nacional de Trabajadores - CNT - declarada ilegal en junio del 73, momento en el que sus dirigentes fueron encarcelados y sus sedes clausuradas. Las pancartas exhibidas y las consignas coreadas por la muchedumbre parecían querer desmentir la posición rígida de los militares que pretendían seguir coartando la respuesta popular.

Una nueva manifestación, de unos pocos miles de personas, siguió a la eclosión del Primero de Mayo. Esta, que llegó hasta las propias puertas de la Casa de Gobierno, se produjo el día del décimo aniversario del golpe de Estado. A raíz de este episodio, varias decenas de jóvenes fueron detenidos y el tema de las torturas estuvo encima de la mesa.

Tras la experiencia del Primero de Mayo, el gobierno militar prohibió la realización de un acto conmemorativo del día mundial de las cooperativas y otro del Plenario Intersindical de Trabajadores. Este último era para anunciar que la Confederación General de Trabajadores del Uruguay - creada por el gobierno para ocupar el lugar de la CNT - había sido expulsada de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en su 13 Congreso, "por su colaboración con el régimen militar".

El Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior, Dr. Hugo Villar, alertó sobre la nueva ola represiva desatada en Uruguay, y afirmó que "el pueblo es consciente de que nada será concedido graciosamente por el régimen y la lucha tendrá aún que ser dura".

Medidas y crisis

Los productores rurales realizaron un paro en sus actividades productivas, comerciales y financieras, respondiendo en forma unánime al llamado de la Federación Rural. La medida, sin precedentes en la historia del país, fue resuelta como protesta por la situación económica del sector. El 50 por ciento de las empresas agropecuarias está en cesación de pagos, por la deuda que se ha venido acumulando en los últimos años con la banca privada. 24 gremiales afiliadas a la Federación se pronunciaron sobre "la necesidad de una moratoria hasta que asuma el gobierno democrático".

Este paro del sector productivo agropecuario ha sido precedido por distintas manifestaciones de industriales y comerciantes. La Cámara de Industrias, en una asamblea sin parangón desde su fundación en 1898, proclamó a la industria "en estado de emergencia". Participaron 620 industriales y reclamaron medidas concretas para sacar al país de la recesión.

La crítica situación económica que atravesaba el país se vio agravada con las medidas adoptadas en noviembre último al ser estruendosamente devaluado el dólar. La moneda norteamericana osciló en los primeros treinta días en un incremento del orden del 60 al 155 por ciento. Y ello trastrocó los costos y acrecentó aún más las tasas de interés.

El aumento del costo de la vida ha sido mayor en los cuatro primeros meses de este año que en todo 1982. La desocupación se ha acrecentado y el porcentaje total de ingresos que corresponde a los asalariados, que era del 40 por ciento en 1973, ha llegado en la actualidad al 24.9 por ciento.

Mientras todo esto ocurre en el frente interno las reservas internacionales en el Banco Central del Uruguay disminuyeron en un 25 por ciento en enero de este año con respecto a diciembre de 1982, con una pérdida de 51 millones de dólares, según voceros oficiales. Durante 1982, el Banco Central se desprendió además de 534.193 onzas de oro, de las cuales el 60 por ciento fue negociada en diciembre. Paralelamente, el pago de la deuda externa y los compromisos contraídos - sobre todo tras la última carta intención firmada este año con el FMI - distrae ingentes recursos. Y lo que mayor preocupación crea en la materia, en medio de la erizada búsqueda de salidas políticas, es que el grueso de la amortización efectiva de las últimas maniobras monetarias negociadas por el gobierno, caerían sobre las nuevas autoridades, pues deben afrontarse después de julio de 1985. Eso dificultaría

aún más la acción de los gobernantes que sucedan al actual régimen que tanto ha "transformado" la realidad uruguaya.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 67 Julio-Agosto 1983, ISSN: 0251-3552**, <www.nuso.org>.**